



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Bancolombia S.A. (Cedente) Reintegra S.A.S. (Cesionaria)
Demandado	Ever Green Communications S.A. y/o
Radicado	05001 31 03 002 2010 00855 01
Procedencia	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 94
Decisión	Confirma
Tema	Desistimiento tácito
	En lo relevante, entonces, como lo señala el evento previsto en el numeral 2º del artículo 317 del C. General del Proceso y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil: (i) El desistimiento tácito tiene aplicación aunque en ejecutivo se haya proferido sentencia o auto que orden cesar la ejecución; (ii) El plazo previsto en el numeral es de dos años contado desde la última actuación relevante; (iii) En fase de ejecución esas actuaciones son las necesarias para obtener el pago de la obligación, o lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor con la finalidad de subastarlos para satisfacer el crédito perseguido.

2022-076

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Reintegra S.A.S. contra el auto del 14 de junio del año que transcurre, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín en el proceso ejecutivo

adelantado Bancolombia S.A. en contra de en contra de Ever Green Communications S.A., Juan David Hernández e Inés Elvira Galindo mediante el cual se declaró terminado el proceso por desistimiento tácito.

I. LO ACTUADO

a) En el Juzgado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín se adelantó proceso ejecutivo instaurado por Bancolombia S.A. en contra de Ever Green Communications S.A., Juan David Hernández e Inés Elvira Galindo en el que mediante providencia del 8 de marzo del año 2013 se ordenó seguir adelante la ejecución (ver folios 79 y 83 del cuaderno principal).

c) El expediente fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, el que el 19 de noviembre de 2019 se aceptó la cesión del crédito a favor de Reintegra S.A.S. y se requirió a la sociedad cesionaria para que constituyera apoderado judicial por tratarse de un trámite de mayor cuantía (fl.107 C-01).

d) En proveído del 5 de marzo de 2018 a petición de parte se solicitó a TRANSUNION S.A., que informara qué productos financieros poseían los demandados en las diferentes entidades del sector financiero.

e) El 14 de junio de 2022, se decretó la terminación por desistimiento tácito, toda vez que la última actuación en el proceso es del 19 de noviembre de 2019, por lo que ha transcurrido más de dos años de inactividad (fl.108-110 C-01),

providencia que fue recurrida por el apoderado judicial de la ejecutante, indicando que en virtud de la sentencia del año 2013 el proceso se encuentra en fase de ejecución existiendo un derecho cierto sobre la obligación que se obstaculiza ante la existencia de medidas cautelares practicadas.

Como argumento de autoridad trajo providencia del 4 de julio de 2017 proferida por el Tribunal Sala, cuyo aparte transcribió así:

“en criterio de la sala Unitaria, la posibilidad de decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito en aquellos juicios que cuentan con sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante la ejecución, resulta violatoria de la constitución por cuanto tal proceder implicaría un abierto desconocimiento de los principios de acceso a la administración de justicia y debido proceso; tanto es ello así que incluso desde el año 2015 se han venido profirieron –sic- algunos pronunciamientos en tal sentido al interior de la sala civil de esta corporación, uno de los cuales incluso, se abstuvo de aplicar el literal b) del numeral segundo del artículo 317 del código general del proceso donde ya se ha ordenado seguir adelante la ejecución desconoce directamente el contenido de postulados constitucionales como el derecho a acceso a la administración de justicia”.

e) El recurso horizontal fue resuelto de manera desfavorable puesto que desde el 19 de noviembre de 2019 no existe ninguna solicitud tendiente a impulsar el trámite del proceso; que la decisión adoptada está en consonancia con la sentencia STC111de 2020 en donde se unificó jurisprudencia.

f) Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes;

II. CONSIDERACIONES

1. En sentencia STC1216 de 2022, en asunto de similares contornos como al que ahora convoca el Tribunal la Sala de Casación Civil, actuando como juez constitucional y el que se hizo petición con el fin de suspender el término previsto en el numeral 2º del artículo 317 del C. General del Proceso, señaló:

“En segundo término, se constata que la falladora censurada, aunque apoyó su decisión en la sentencia STC11191-2020, en realidad, no comprendió su alcance y efectos, pues estimó que el interregno contenido en el literal b) del numeral 1º, artículo 317 *ídem*, se había suspendido con el pedimento realizado por el banco demandante el 4 de noviembre de 2020, con el cual buscó que el *a quo* oficiara a Instrumentos Públicos para que averiguara por los bienes del deudor, reclamo intrascendente, si se tiene en cuenta que el ejecutante podía obtener esa información directamente, a través de derecho de petición, como se le indicó en proveído de 13 de noviembre siguiente.

Se resalta, esta Sala estableció la aplicación del canon normativo en cita, determinando que sólo las actuaciones **relevantes** en el proceso pueden dar lugar la «*interrupción*» de los lapsos previstos en el mismo. Justamente, en la sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, para unificar las reglas jurisprudenciales de interpretación de la referida norma, sobre los procesos ejecutivos, se señaló:

«[D]ado que el desistimiento tácito consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso, busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para [que] se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer”.

“En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)”.

“Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento”.

“Como en el numeral 1° lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término”.

“En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo”.

“Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio”.

“Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada”.

“Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «desistimiento tácito» no se aplicará, cuando las partes «por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (...)» (subrayas propias).

Dicha postura ya había sido expuesta por la Sala en providencia STC4021-2020, donde se especificó:

No solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho”

*Simple solicitudes de copias o **sin propósitos serios de solución de la controversia**, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, **no pueden tenerse como ejercicio válido de impulso procesal**”.*

*Ciertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, **o la actuación que efectuó la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser útiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho**”.*

Así, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento tácito de su proceso y, especialmente, con relación a la mora en la definición de la contienda”.

Lo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisión de fondo en la controversia, el expediente lleva año y medio paralizado en la secretaría del despacho, la simple petición de copias por escrito o la expedición de una certificación, no pueden ser tenidas como válidas para interrumpir el término señalado en el artículo 317 del C.G.P.

Ello, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que así lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes de impedir la tardanza que tanto afecta a la administración de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por idóneos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento tácito» (negrilla fuera del texto).

Por tanto, no todo escrito interrumpe el término del desistimiento tácito; así, para los procesos ejecutivos en los que exista sentencia o auto de seguir adelante con la ejecución, la suspensión, según lo advirtió la Sala en pasada oportunidad, *«se logra únicamente con actuaciones tendientes a la obtención del pago de la obligación o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el crédito perseguido»* (CSJ, STC4206-2021) ...”

2. En lo relevante, entonces, como lo señala el evento previsto en el numeral 2º del artículo 317 del C. General del Proceso y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil: **(i)** El desistimiento tácito tiene aplicación aunque en ejecutivo se haya proferido sentencia o auto que orden cesar la ejecución; **(ii)** El plazo previsto en el numeral es de dos años contado desde la última actuación relevante; **(iii)** En fase de ejecución esas actuaciones son las necesarias para obtener el pago de la obligación, o lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor con la finalidad de subastarlos para satisfacer el crédito perseguido.

3. Por manera que, a pesar de que otra Sala Unitaria Civil de Decisión considera inaplicable la norma en comento, la traída

ahora como argumento de autoridad permite concluir que acertado estuvo el *a quo* en el decreto del desistimiento tácito, como que la última actuación relevante del proceso la constituyó el auto del 19 de noviembre de 2019 que aceptó la cesión del Crédito que hiciera la entidad ejecutante en favor de Reintegra S.A.S., a la vez que efectuó requerimiento a la cesionaria para que constituyera apoderado judicial por tratarse de un trámite de mayor cuantía en este caso.

III. DECISION

En mérito de lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, CONFIRMA** el auto apelado de fecha y naturaleza indicada en la parte motiva de esta providencia. Sin costas por no haberse causado.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c9982655db566af048a23dcf83ee5785699883f01e93bb7984558d88dba30cd0**
Documento generado en 18/01/2023 08:56:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>